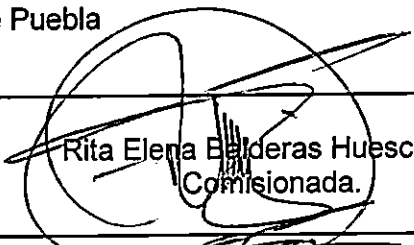



Versión Pública de RR-5306/2023, que contiene información clasificada como confidencial

Fecha de elaboración de la versión pública	El 12 de abril del 2024.
Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.	Fecha 15 de abril del 2024 y Acta de Comité número 007/2024
El nombre del área que clasifica.	Ponencia dos.
La identificación del documento del que se elabora la versión pública.	RR-5306/2023
Páginas clasificadas, así como las partes o secciones que la conforman.	1. Se eliminó el nombre del recurrente en la página 1.
Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.	Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 7 fracción X y 134 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, numeral trigésimo octavo fracción primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 5 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla
Nombre y firma del titular del área.	 Rita Elena Balderas Huesca. Comisionada.
Nombre y firma del responsable del testado (en su caso).	 Magnolia Zamora Gómez. Secretaría de Instrucción
Nombre de las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Sentido de la resolución: **CONFIRMAR.**

Visto el estado procesal del expediente número **RR-5306/2023**, relativo al recurso de revisión interpuesto por el solicitante **Eliminado 1** en lo sucesivo el recurrente en contra del **PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**, en lo continuo el sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES.

- I.** Con fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, el hoy recurrente, envió al sujeto obligado por medio electrónico una solicitud de acceso a la información, la cual fue asignada con el número de folio 210425323000583.
- II.** El treinta y uno de octubre del año pasado, el sujeto obligado dio respuesta al recurrente sobre su solicitud de acceso a la información.
- III.** El día seis de noviembre del año que transcurrió, el entonces solicitante interpuso el presente recurso de revisión, en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado en su petición de información.
- IV.** Por auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, la Comisionada presidente del Instituto, tuvo por recibido el medio de impugnación interpuesto por el recurrente, mismo al que se le asignó el número de expediente **RR-5306/2023** y fue turnando a su ponencia para su trámite respectivo.
- V.** En proveído de trece de noviembre del año pasado, se admitió el recurso de revisión ordenando integrar el expediente correspondiente. Asimismo, lo puso a disposición de las partes para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o alegatos. De igual forma, se ordenó notificar el auto admisorio al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, para efecto que rindiera su informe justificado, debiendo anexar las constancias que acreditara el acto reclamado, así como las

demás pruebas y/o alegatos que considerara pertinentes; además, se hizo del conocimiento del recurrente el derecho que le asistía para oponerse a la publicación de sus datos personales, señalando la página web en la cual se encontraba el aviso de privacidad correspondiente a la base de datos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; finalmente, se le tuvo señalando para recibir sus notificaciones personales en el correo electrónico indicado en su medio impugnación y de igual forma, se puntualizó que no ofreció pruebas.

VI. Por acuerdo de quince de diciembre del año que transcurrió, se hizo constar que el sujeto obligado rindió su informe justificado en tiempo y forma legal, asimismo, indicó que ofreció pruebas; de igual forma, se señaló que para mejor proveer se requirió a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles siguientes de estar debidamente notificado remitiera a este Órgano Garante el inicio y la última actuación de la auditoria con número OIC-AI-03/2023, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una medida de apremio.

VII. En auto de dos de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo al sujeto obligado remitiendo la documentación solicitada, por lo que, dio cumplimiento a lo ordenado en autos; en consecuencia, se continuó con el procedimiento, en el sentido, que se admitieron únicamente las pruebas anunciadas por el sujeto obligado, mismas que se desahogaron por su propia y especial naturaleza, en virtud de que el recurrente no ofreció material probatorio alguno. De igual forma, se puntualizó la negativa del agraviado para que se publicaran sus datos personales, en virtud de que no expresó nada al respecto y finalmente, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó turnar los autos para dictar la resolución. Finalmente, se ordenó ampliar por una sola ocasión el plazo para resolver el presente asunto hasta por veinte días hábiles, contados a partir de ese día, toda vez que se necesitaba un término mayor para agotar el estudio de las constancias que obran en el expediente respectivo.

VIII. El día veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, se listó el presente asunto para ser resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

CONSIDERANDO

Primero. El Pleno de este Instituto es competente para resolver el presente recurso de revisión en términos de los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2º fracción III, 10, fracciones III y IV, 23, 37, 39 fracciones I, II y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1º y 13 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Segundo. El recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Tercero. El recurso de revisión se interpuso vía electrónica cumpliendo con todos los requisitos aplicables establecidos en el artículo 172, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Cuarto. El recurso de revisión cumplió con el requisito establecido en el diverso artículo 171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que fue presentado dentro del término legal.

Quinto. En este punto, se transcribirán los hechos acontecidos en el presente asunto, en los términos siguientes:

En primer lugar, el día tres de octubre de dos mil veintitrés, el hoy recurrente envió al Poder Judicial del Estado de Puebla, una solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número de folio 210425323000583, la cual dice:

"Pido copia digital de los contratos:

PJE-DSGRM/A-001/2023

PJE-DSGRM/A-002/2023

PJE-DSGRM/A-003/2023

PJE-DSGRM/A-004/2023

PJE-DSGRM/A-005/2023"

A lo que, el sujeto obligado al momento de contestar la solicitud, anexó el acta de su Comité de Transparencia de la Vigésima Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintitrés y la prueba de daño de dieciocho de octubre del año pasado, que se encuentran en los términos siguientes:

En primer lugar, en el acta antes mencionada se observa:

"PRIMERO: El Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado es competente para conocer y resolver sobre la confirmación de la clasificación de la información como reservada solicitada, de conformidad con los artículos 22 fracción II, 118 y 130 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así como el numeral Quincuagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Av 5 Ote 201, Centro, Puebla, Pue.
SEGUNDO: Si bien el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla establece que toda la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos obligados se considera información pública, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece propia la Ley y demás normatividad aplicable, también prevé que ésta será sujeta a un claro régimen de excepciones que estarán establecidas en la norma en cita, al tenor del diverso 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

TERCERO: De conformidad con lo establecido por el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así como el numeral trigésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, a continuación se cita la prueba de daño presentada por la unidad administrativa que clasifica la información de mérito, con

el fin de motivar la misma, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por el artículo 123 fracción V de la ley de la materia: ...

CUARTO. *En uso de la voz, la Maestra Christiane Tabe Morales manifiesta que toda vez que la unidad administrativa responsable de la información solicitada depende directamente de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, en este momento se excusa de participar en la discusión y votación del presente asunto.*

QUINTO. *Que conforme a los motivos, causas y razones que se plasman en los argumentos de las consideraciones que anteceden, el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Puebla deberá observar lo prescrito en los artículos 22 fracción II y 155 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en materia de clasificación de la información y del procedimiento respectivo, numerales que establecen: ...*

En ese sentido, de la lectura y análisis a la prueba de daño que el área responsable de la información acompañó a su solicitud, y tomando en consideración la fundamentación realizada, este Comité de Transparencia advierte que se acreditan los elementos previstos en el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública, encontrándose debidamente justificadas las causales invocadas para sustentar la clasificación de la información de mérito como reservada.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 22 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, los integrantes de este Órgano Colegiado, se

----- **RESUELVE** -----

PRIMERO. *Con fundamento en el artículo 155 segundo párrafo inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Puebla confirma, por mayoría de votos, la clasificación de la información solicitada como reservada, toda vez que la información cumple con los requisitos establecidos en la Ley de la materia, como ha quedado demostrado en los considerandos plasmados en el presente acuerdo.*

SEGUNDO. *Con fundamento en lo previsto en el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública, y atendiendo a la naturaleza del procedimiento, la información se clasifica como reservada por un periodo de 5 años o en tanto concluya la auditoría integral número OIC-AI-03/2023.*

TERCERO. *Hágase de conocimiento del Titular de la Unidad de Transparencia la presente resolución, para que conforme al artículo 156 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, notifique esta determinación al solicitante en términos de Ley."*

En la prueba de daño de fecha dieciocho de octubre del dos mil veintitrés, realizada por la Directora de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, se advierte:

"El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: ...

En virtud de lo anterior, si bien es cierto que el derecho a la información pública es un derecho humano previsto en la Carta Magna, también lo es que ésta establece ciertos límites a su ejercicio, tomando en cuenta el interés público, por lo que mediante la presente prueba de daño se pretenden acreditar los criterios para clasificar la información requerida en la solicitud de información con número de folio 210425323000583, toda vez que por su naturaleza, se encuentra vinculada directamente con el proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023, realizada por el Órgano Interno de Control de este sujeto obligado.

Así, con fundamento en lo previsto en los artículos 115 fracción I y 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y Séptimo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se pone a consideración del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Puebla, la confirmación de la clasificación como información reservada respecto a los contratos PJE-DSGRM/A-001/2023, PJE-DSGRM/A-002/2023, PJE-DSGRM/A-003/2023, PJE-DSGRM/A-004/2023, PJE-DSGRM/A-005/2023, por actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 123 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el cual a la letra establece: ...

Ahora bien, el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, señala lo siguiente: ..

En virtud de lo señalado en el precepto legal anteriormente invocado, a continuación, se procede a acreditar cada uno de los elementos a los que el mismo hace referencia, con el fin de justificar que la entrega de la información de mérito derivaría en la obstrucción al proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023.

"1. La existencia de un procedimiento de verificación de cumplimiento de las leyes":

Este elemento se acredita en virtud de la existencia del proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, cuya orden se notificó a la entonces Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, actualmente Secretaría de Administración y Planeación, el día 22 de marzo de 2023 mediante oficio OIC-DA-DCI-168/2023.

"2. Que el proceso se encuentre en trámite":

El proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023, a cargo del Órgano Interno de Control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla inició el día 22 de marzo del año 2023 y se encuentra actualmente abierto y en revisión por la instancia señalada, y aún no se ha tomado la decisión definitiva.

"3. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes":

Se tiene como acreditado el supuesto de que la información se encuentra relacionada de manera directa con el proceso deliberativo, toda vez que el documento solicitado refiere al análisis de la información y a procedimientos de auditoría en comento, que forma parte del cúmulo de documentos que se deben tomar en consideración para decidir la determinación de dicha auditoría; por lo que resulta evidente que la información requerida mediante la solicitud con folio 210425323000583 se encuentra vinculada de manera directa en la auditoría de referencia.

"4. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes".

Tomando en consideración que el proceso de auditoría implica la revisión, verificación y comprobación de la información contenida en el área auditada, la misma puede ser susceptible de ser modificada, ajustada y validada por las instancias que intervienen, por lo que la eventual difusión de la documentación solicitada obstaculizaría el desarrollo de los procedimientos llevados a cabo por el Órgano Interno de Control, hasta concluir con la emisión de hallazgos y cierre de la misma, razón por la cual se acredita el elemento en cuestión.

Una vez acreditados los elementos a los que se ha hecho referencia, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, resulta procedente justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público.

En ese sentido, se debe decir que la divulgación de la información constituye un riesgo real toda vez que el Órgano Interno de Control podría ver limitada sus funciones de revisión, supervisión, evaluación, control y seguimiento a la información materia de la auditoría integral número OIC-AI-03/2023 al proporcionar al solicitante información que está siendo fiscalizada por éste; además de que al no haber terminado su tramitación, la eventual exposición a medios de comunicación o la intromisión de terceros afectaría el proceso de conclusión.

Por otra parte, se considera un riesgo real demostrable, en razón de que al entregarse la información requerida, se obstaculizarían los procedimientos de auditoría orientados a la determinación de la correcta aplicación de los recursos públicos y, en su caso, la identificación de actos u omisiones que pudieran constituir posibles irregularidades administrativas, además de que se estaría difundiendo información que forma parte de una revisión no concluida y que por lo mismo

podrían contener datos inexactos, incrementando la posibilidad de dañar la actuación de la autoridad competente.

Finalmente representa un riesgo identificable, pues se obstruiría el ejercicio de facultades que permitan al área auditada realizar las aclaraciones correspondientes y, por ende, la correcta sustanciación de la auditoría de mérito por parte del Órgano Interno de Control, pues la divulgación de los documentos podría alterar las tareas de revisión y evaluación llevadas a cabo por éste.

Por otra parte, en observancia a lo previsto en las fracciones II y III del artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla se debe considerar que el riesgo de perjuicio que supone su divulgación supera el interés público general, y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, en virtud de lo siguiente:

Si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé que toda persona tiene derecho a ejercer su derecho de acceso a la información y los sujetos obligados deben garantizarlo, no puede pasar inadvertido que la información puede ser reservada por causas de interés público, que en el caso concreto sería la adecuada conducción del proceso de auditoría a la correcta aplicación de los recursos públicos, sin que ello represente una restricción como tal al derecho humano de acceso a la información.

Lo anterior es así, en virtud de que la divulgación de la información solicitada ocasionaría un daño y, en consecuencia, podría derivar en una responsabilidad para este sujeto obligado, al transgredir disposiciones federales y estatales de carácter obligatorio que ordenan resguardar información cuya protección es obligatoria por tratarse de información reservada, en tanto no concluya el proceso de auditoría multicitado.

Así, existe un riesgo fundado de que con la difusión de la información se afecte un proceso de auditoría que tiene por objeto general garantizar la correcta aplicación de recursos públicos, siendo tal situación mayor que el interés del solicitante en conocer la documentación requerida, por lo que de la ponderación de estos derechos fundamentales se advierte que prevalece la reserva de la información en comparación con el interés público general de difundir la información solicitada.

Por lo antes expuesto y fundado, la reserva de la información que nos ocupa es la única y proporcional medida para evitar el perjuicio que se originaría al divulgar el contenido de los contratos PJE-DSGRM/A-001/2023, PJE-DSGRM/A-002/2023, PJE-DSGRM/A-003/2023, PJE-DSGRM/A-004/2023, PJE-DSGRM/A-005/2023, documentación que es requerida por el solicitante y que de hacerse pública pondría en riesgo el proceso de auditoría bajo el que se encuentra la Secretaría de Administración y Planeación, por lo que la información debe tener el carácter de reservada, encontrándose este sujeto obligado imposibilitado para proporcionarla, pues de hacerlo así podría ocasionar un daño irreparable, prevaleciendo la reserva de la información sobre al interés público general de difundir ésta.

Resulta imperativo recordar que los sujetos obligados deben observar lo establecido por el artículo 12 fracción XII de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el cual establece que: ..

Finalmente, habiendo solicitado al comité la confirmación de clasificar la información solicitada como reservada, resulta necesario establecer la temporalidad de la reserva, por lo que se propone que sea por un periodo de 5 años de cinco años contados a partir del acuerdo que confirme la Clasificación de la Información o hasta en tanto la auditoría integral número OIC-AI-03/2023 concluya. Lo anterior a efecto de que se finalicen los procedimientos y el Órgano Interno de Control determine lo conducente.

Por las razones y con el fundamento al que se ha hecho referencia en esta prueba de daño, esta Unidad Administrativa considera que no puede hacer pública la información requerida mediante la solicitud de acceso a la información con folio 210425323000583, por lo que se determina la clasificación de la información como reservada”.

Por lo que, el recurrente interpuso el presente medio de impugnación, en el cual señaló:

“En su respuesta el Sujeto Obligado argumenta que no puede entregar los contratos pues estos forman parte de un proceso de auditoría y esto, dice el SO, podría obstaculizar el procedimiento y por tanto los declara como información reservada por un plazo de cinco años.

Lo que el SO parece olvidar es que la información solicitada es por su naturaleza información pública de oficio, artículo 77:

“Los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible en sus sitios web o en los medios disponibles de conformidad con el último párrafo del artículo 76, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la siguiente información:

Fracción: XXVIII. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

Y dicha información de los contratos ni siquiera fue subida a la PNT como es su obligación legal, y la reserva fue dictada meses después de que el documento se generó y que por obligación debía estar publicado en la PNT.

Pido a este órgano garante revise la respuesta a la luz del Derecho de Acceso a la Información y ordene la entrega de la información solicitada sin mayor dilación.

A lo que, el sujeto obligado en su informe justificado manifestó lo siguiente:

“Resulta infundado por un lado, e inoperante por otro, el agravio manifestado por el hoy recurrente, en razón de lo siguiente:

Si bien es cierto, la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos obligados se considera información pública, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, es importante mencionar que en el mismo ordenamiento legal se establece que el acceso a dicha información podrá restringirse mediante las figuras de información reservada e información confidencial. En ese sentido, el artículo 116 de la ley de la materia establece: ...

En tal virtud, el principio de máxima publicidad de la información encuentra su excepción en los casos en que los Sujetos Obligados determinen la clasificación de la misma, ya sea como reservada o confidencial, de conformidad con las hipótesis previstas en la ley de la materia y previa resolución emitida al respecto por parte del Comité de Transparencia.

Además, la clasificación de la información, contrario a lo manifestado por el recurrente, no se debe realizar al momento en que se genera un documento, sino que, por el contrario, la misma se debe llevar a cabo una vez que se actualice la hipótesis normativa correspondiente, es decir, una vez que el documento generado encuadre en los motivos legales por los cuales se puede determinar la clasificación de la información.

Al efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, existen tres momentos para llevar a cabo la clasificación de la información: ...

Por lo tanto, en el asunto que nos ocupa, la simple generación de los contratos solicitados no es razón suficiente para determinar su clasificación como información reservada, sino que derivado de la existencia del proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023, ordenada por el Órgano Interno de Control del Poder Judicial del Estado de Puebla, es cuando se actualiza la hipótesis normativa establecida en el artículo 123 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y en el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que establecen: ...

Cabe mencionar que no basta con el hecho de que determinada información encuadre en la hipótesis establecida en la normatividad aplicable sino que, de conformidad con lo señalado en el artículo 126 de la ley de la materia, resulta imperativo justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; además de acreditar cada uno de los elementos a los que hace referencia el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, citado en el párrafo que antecede.

Así, en el asunto particular, lo anterior fue debidamente acreditado mediante la prueba de daño presentada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, la cual fue notificada al entonces solicitante junto con la respuesta correspondiente y el Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, por medio de la cual dicho cuerpo colegiado resolvió confirmar la clasificación de la información solicitada. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 125, 126 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, así como numerales Cuarto, Quinto y Quincuagésimo Primero penúltimo párrafo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

De esa manera, en la prueba de daño de referencia se plasmó lo siguiente:

"...a continuación se procede a acreditar cada uno de los elementos a los que el mismo hace referencia, con el fin de justificar que la entrega de la información de mérito derivaría en la obstrucción al proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023.

"1. La existencia de un procedimiento de verificación de cumplimiento de las leyes":

Este elemento se acredita en virtud de la existencia del proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, cuya orden se notificó a la entonces Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, actualmente Secretaría de Administración y Planeación, el día 22 de marzo de 2023 mediante oficio OIC-DA-DCI-168/2023.

"2. Que el proceso se encuentre en trámite":

El proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023, a cargo del Órgano Interno de Control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla inició el día 22 de marzo del año 2023 y se encuentra actualmente abierto y en revisión por la instancia señalada, y aún no se ha tomado la decisión definitiva.

"3. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes":

Se tiene como acreditado el supuesto de que la información se encuentra relacionada de manera directa con el proceso deliberativo, toda vez que el documento solicitado refiere al análisis de la información y a procedimientos de auditoría en comento, que forma parte del cúmulo de documentos que se deben tomar en consideración para decidir la determinación de dicha auditoría; por lo que resulta evidente que la información requerida mediante la solicitud con folio 210425323000583 se encuentra vinculada de manera directa en la auditoría de referencia.

"4. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes".

Tomando en consideración que el proceso de auditoría implica la revisión, verificación y comprobación de la información contenida en el área auditada, la misma puede ser susceptible de ser modificada, ajustada y validada por las instancias que intervienen, por lo que la eventual difusión de la documentación solicitada obstaculizaría el desarrollo de los procedimientos llevados a cabo por el Órgano Interno de Control, hasta concluir con la emisión de hallazgos y cierre de la misma, razón por la cual se acredita el elemento en cuestión

En ese sentido, se debe decir que la divulgación de la información constituye un riesgo real toda vez que el Órgano Interno de Control podría ver limitada sus funciones de revisión, supervisión, evaluación, control y seguimiento a la información materia de la auditoría integral número OIC-AI-03/2023 al proporcionar al solicitante información que está siendo fiscalizada por éste; además de que al no haber terminado su tramitación, la eventual exposición a medios de comunicación o la intromisión de terceros afectaría el proceso de conclusión.

Por otra parte, se considera un riesgo real demostrable, en razón de que al entregarse la información requerida, se obstaculizarían los procedimientos de auditoría orientados a la determinación de la correcta aplicación de los recursos públicos y, en su caso, la identificación de actos u omisiones que pudieran constituir posibles irregularidades administrativas, además de que se estaría difundiendo información que forma parte de una revisión no concluida y que por lo mismo podrían contener datos inexactos, incrementando la posibilidad de dañar la actuación de la autoridad competente.

Finalmente representa un riesgo identificable, pues se obstruiría el ejercicio de facultades que permitan al área auditada realizar las aclaraciones correspondientes y, por ende, la correcta sustanciación de la auditoría de mérito por parte del Órgano Interno de Control, pues la divulgación de los documentos podría alterar las tareas de revisión y evaluación llevadas a cabo por éste.

Por otra parte, en observancia a lo previsto en las fracciones II y III del artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla se debe considerar que el riesgo de perjuicio que supone su divulgación supera el interés público general, y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, en virtud de lo siguiente:

Si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé que toda persona tiene derecho a ejercer su derecho de acceso a la información y los sujetos obligados deben garantizarlo, no puede pasar inadvertido que la información puede ser reservada por causas de interés público, que en el caso concreto sería la adecuada conducción del proceso de auditoría a la correcta aplicación de los recursos públicos, sin que ello represente una restricción como tal al derecho humano de acceso a la información.

Lo anterior es así, en virtud de que la divulgación de la información solicitada ocasionaría un daño y, en consecuencia, podría derivar en una responsabilidad para este sujeto obligado, al transgredir disposiciones federales y estatales de carácter obligatorio que ordenan resguardar información cuya protección es obligatoria por tratarse de información reservada, en tanto no concluya el proceso de auditoría multicitado.

Así, existe un riesgo fundado de que con la difusión de la información se afecte un proceso de auditoría que tiene por objeto general garantizar la correcta aplicación de recursos públicos, siendo tal situación mayor que el interés del solicitante en conocer la documentación requerida, por lo que de la ponderación de estos derechos fundamentales se advierte que prevalece la reserva de la información en comparación con el interés público general de difundir la información solicitada".

Las razones y argumentos esgrimidos en la prueba de daño fueron suficientes para que el Comité de Transparencia de este Poder Judicial, resolviera confirmar la clasificación de la información como reservada, respecto a lo solicitado por el hoy recurrente en la solicitud de información con número de folio 210425323000583, consistente en los contratos PJE-DSGRM/A-001/2023 PJE-DSGRM/A-002/2023 PJE-DSGRM/A-003/2023 PJE-DSGRM/A-004/2023 PJE-DSGRM/A-005/2023.

Tomando en consideración lo anterior, y no obstante que el hoy recurrente no manifestó como agravio en ningún momento el procedimiento de clasificación como tal, llevado a cabo por este Poder Judicial del Estado, ni los motivos y la fundamentación plasmadas, resulta pertinente dejar de manifiesto que la misma se llevó a cabo observando cada uno de los requisitos previstos en la normatividad de la materia, justificando a su vez que la información solicitada forma parte del proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023 realizado por el Órgano Interno de Control de este Sujeto Obligado, lo cual hace patente la necesidad de clasificarla en la modalidad de reservada, por las razones antes mencionadas.

Por lo expuesto hasta el momento, es inconcuso que una vez acreditados cada uno de los elementos requeridos por la normatividad aplicable, los cuales fueron plasmados en la prueba de daño de referencia, y al ser confirmada la clasificación de la información realizada por la Unidad Administrativa responsable de la información por parte del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, en el caso concreto se actualizó la excepción al principio de máxima publicidad a la que hace referencia el artículo 116 de la ley de la materia, por lo que debe considerarse infundado el motivo de inconformidad del hoy recurrente.

Por otra parte, es importante precisar que el Recurso de Revisión no es la vía legal idónea para combatir un supuesto incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, como lo intenta el hoy recurrente en el caso que nos ocupa.

Lo anterior es así, toda vez que, como se advirtió anteriormente, el entonces solicitante no manifiesta agravio alguno con relación al procedimiento llevado a cabo por las áreas responsables de este Sujeto Obligado de generar la información requerida, respecto a la clasificación de la misma, sino que se queja del momento en que ésta se realizó al ser, en su opinión, una obligación de transparencia de acuerdo a la citada fracción XXVIII del artículo 77 de la ley de la materia. Esto queda de

manifiesto al señalar que "...Y dicha información de los contratos ni siquiera fue subida a la PNT como es su obligación legal, y la reserva fue dictada meses después de que el documento se generó y que por obligación debía estar publicado en la PNT..."

Debe considerarse inoperante el agravio manifestado toda vez que, como se ha señalado, el recurso de revisión no es la vía o el medio de defensa con el que los ciudadanos cuentan para inconformarse respecto al cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera que es procedente confirmar la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, toda vez que la clasificación de la información solicitada como reservada se llevó a cabo en estricto cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 181 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla."

En tal sentido, corresponde a este Instituto determinar si existe o no, transgresión al derecho de acceso a la información, de acuerdo a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Sexto. En este apartado se valoran las pruebas anunciadas por las partes.

Por lo que, hace al recurrente no ofreció material probatorio, por lo que, de su parte no se admitió ninguna prueba.

Respecto a los medios probatorios anunciados por el sujeto obligado, se admitieron los que a continuación se mencionan:

Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000 Tel: (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx

- **DOCUMENTAL PÚBLICA:** Consistente en la copia certificada del acuse de registro de la solicitud de acceso a la información 210425323000583.

- **DOCUMENTAL PÚBLICA:** Consistente en la copia certificada del acuse de información reservada de la información requerida en la solicitud con número de folio 210425323000583.

- **DOCUMENTALES PÚBLICAS:** Consistentes en las copias certificadas de dos capturas de pantalla de la plataforma nacional de transparencia en el cual se observa el registro de la solicitud de acceso a la información pública y la información reservada.

- **DOCUMENTAL PÚBLICA:** Consistente en la copia certificada de la respuesta de la solicitud de acceso a la información 210425323000583.
- **DOCUMENTAL PÚBLICA:** Consistente en la copia certificada del acta de la vigésima sesión ordinaria de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Puebla.
- **DOCUMENTAL PÚBLICA:** Consistente en la copia certificada de la prueba de daño, de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en el cual el área de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, clasifica en su modalidad de reservada la información requerida en la solicitud con número de folio 210425323000583.

A las documentales públicas ofrecidas por la autoridad responsable, se les conceden valor probatorio pleno, en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado aplicado supletoriamente de acuerdo al diverso 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Séptimo. En este punto se expondrán de manera resumida los hechos acontecidos en el presente asunto y serán analizados en relación al acto reclamado.

En primer lugar, el hoy recurrente remitió al Poder Judicial del Estado de Puebla, una solicitud de acceso a la información con número de folio **210425323000583**, en la que requirió en copia digital los contratos con números PJE-DSGRM/A-001/2023; PJE-DSGRM/A-002/2023; PJE-DSGRM/A-003/2023; PJE-DSGRM/A-004/2023 y PJE-DSGRM/A-005/2023.

A lo que, el sujeto obligado, al momento de contestar la solicitud, entregó al entonces solicitante el acta de su Comité de Transparencia de la Vigésima Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintitrés y la prueba de daño de dieciocho de octubre del año pasado.

Por lo que, en contra de la respuesta otorgada a su solicitud, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión, en el cual alegó que el sujeto obligado manifestó que no pudo entregar los contratos en virtud de que los mismos se encontraba en una auditoría, por lo que, la información requerida se clasificaba como reservada por cinco años, sin embargo, la autoridad responsable olvidaba que lo solicitado era información pública de oficio en términos del artículo 77 fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia en el Estado de Puebla, aunado a que los contratos requeridos no fueron subidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, como era su obligación legal y la reserva fue dictada meses después de que el documento se generó y que por obligación debía estar publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Y el sujeto obligado al rendir su informe justificado manifestó que el agravio del recurrente era infundado e inoperante en virtud de que si bien era cierto que la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en posesión de los sujetos obligados se considera información pública, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley de Transparencia en el Estado de Puebla, sin embargo, dicho ordenamiento legal también establece que el acceso a dicha información podrá restringirse mediante las figuras de información reservada y confidencial, en términos del numeral 116 de la ley antes mencionada, por lo que, el principio de máxima publicidad tenía excepciones.

De igual forma la autoridad responsable señaló que, contrario a lo expresado por el recurrente, la clasificación de la información no se realiza al momento que se genera el documento, sino que se lleva a cabo cuando se actualiza la hipótesis normativa correspondiente, tal como lo establece el numeral 115 de la Ley de Transparencia en el Estado de Puebla, por lo que, la simple generación de los contratos solicitados no era razón suficiente para determinar su clasificación como información reservada, sino que derivado de la existencia del proceso de auditoría integral número OIC-AI-03/2023 ordenada por el Órgano Interno de Control de Poder Judicial del Estado de Puebla; se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 123 fracción V de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Asimismo, el Titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Puebla, en su informe justificado expresó que no bastaba el hecho de que se determinara que la información se encontraba en las hipótesis establecidas en la normatividad aplicable, sino que en términos del artículo 126 de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla, resulta imperativo justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y además acreditar cada uno de los elementos señalados en el numeral vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, los cuales quedaron acreditados en la prueba de daño elaborada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, misma que fue notificada al recurrente, así como el Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de su Comité de Transparencia, en la cual se confirmaba la clasificación de la información solicitada, tal como lo establecen los numerales 125, 126 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado y los artículos cuarto, quinto y quincuagésimo primero en el penúltimo párrafo de los Lineamientos Generales antes mencionados.

Una vez expuesto lo anterior, es importante establecer que el derecho de acceso a la información se encuentra consagrado en el artículo 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los ciudadanos de un país democrático pueden acceder a la información que se encuentre en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, sin acreditar un interés jurídico u afectación personal para obtener la información que esté en poder del Estado; en consecuencia, este último tiene la obligación de entregar la

misma, a las personas que requiera dicha información, toda vez que este derecho fundamental está regido por el principio de máxima publicidad, garantizando así la entrega de la información a las personas de nuestro país con los limitantes que establece la Carta Magna y las leyes que regula este derecho, en virtud de que la información puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y confidencial por protección de los datos personales y la vida privada de las personas.

De igual manera los numerales 3, 4, 7, fracciones XI, XIX, 8°, 12, 16 fracción IV, 17, 142, 145, 154, 156 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Puebla, regula que el acceso a la información, es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual, obliga a las autoridades a respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

Por lo que, en aras de garantizar el mismo, los sujetos obligados tienen el deber de atender las solicitudes que le sean presentadas, otorgando a los solicitantes la información que les requieran, relacionada con el ejercicio de sus funciones, ya que, como se ha mencionado, es una obligación entregar la información que hubieren generado a la fecha de la solicitud, es decir, actos existentes y concretos, o en su caso, acreditar a través de los mecanismos establecidos, que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley de la materia.

A lo anterior tiene aplicación la Tesis Aislada I.4o.A.40 A, de la Décima Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 3, página 1899, con el rubro y texto siguiente:

"ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto,

cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa."

Ahora bien, el sujeto obligado al momento de contestar la solicitud indicó que en términos del numeral 123 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública la información solicitada se encontraba reservada por cinco años o hasta en tanto se concluía la auditoria integral con número OIC-AI-03/2023, por lo que, el entonces solicitante interpuso el presente medio de impugnación en el cual alegó como acto reclamado la clasificación de la información solicitada como reservada; por lo que es importante señalar que, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en su Título Sexto, Capítulo II, se encuentran los criterios bajo los cuales puede ser clasificada la información como reservada.

En primer lugar, resulta viable señalar el proceso que deben llevar los sujetos obligados al momento de clasificar la información, para observar si la autoridad responsable cumplió con lo establecido en los ordenamientos legales que regulan el derecho de acceso a la información, el cual se encuentra establecido en los artículos 22, fracción II, 113, 114, 115, fracción I, 116, 118, 124, 125, 126, 127, 130, 142, 144, 155 y 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

De los preceptos citados, se observa que los ciudadanos por sí, o por medio de su representante, podrán presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de acreditar interés, justificación o motivación alguna.

Asimismo, el legislador estableció que las formas en que el sujeto obligado tiene para dar respuesta a las peticiones de información son:

✓ **Haciéndole saber al ciudadano que la información requerida no es de su competencia o no existe o es información reservada o confidencial.**

✓ Haciendo saber al solicitante la dirección electrónica completa o la fuente en donde puede consultar la información solicitada.

✓ Entregando o enviando en su caso la información de ser posible en el medio que el solicitante la requirió, siempre que se cubran los costos de reproducción.

✓ Entregando la información por el medio electrónico disponible

✓ Poniendo al solicitante la información en consulta directa.

Por otra parte, los artículos indicados señalan que la clasificación de la información es el proceso por el cual los titulares de las áreas que tienen a resguardo la información requerida, determinan que lo solicitado por los ciudadanos se encuentra catalogado como reservado o confidencial, por uno de los supuestos establecidos en la ley de la materia.

El procedimiento antes indicado se lleva a cabo, entre otras hipótesis, en el momento que:

• **Se recibe una solicitud de acceso a la información.**

Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue, C.P. 72000

Tel: (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx

Una vez que el Titular de la Unidad de Transparencia recibe la petición de información, debe turnarla a todas las áreas competentes que cuenten con la misma o tenga la atribución, de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, tal como lo señala el numeral 17 del ordenamiento legal en la Materia en el Estado de Puebla, por lo que estos últimos son los responsables de clasificar la información en términos de ley.

Por tanto, en los casos en que el Titular del área que tiene la información observe que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, por actualizarse una

de las causales establecidas en la ley que regula el derecho de acceso a la información, deberá realizar una prueba de daño, en la cual justifique lo siguiente:

- Que la divulgación de la información requerida por el solicitante representa un riesgo real, demostrable e identificable un perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera al interés público general de que se difunda.
- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Posteriormente, el área respectiva deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive su clasificación (prueba de daño) al Comité de Transparencia, para que este a su vez dicte la resolución en la cual confirme, modifique o revoque la misma, haciendo del conocimiento al solicitante en el medio que este haya señalado para tales efectos, en virtud de que la autoridad responsable tiene la obligación de hacer saber a los ciudadanos porqué niega el acceso a la información, toda vez que éste tiene la carga de la prueba de justificarle tal hecho en términos del último párrafo del artículo 127 de la Ley de la Materia en el Estado de Puebla.

Una vez establecido lo anterior, es viable retomar que el sujeto obligado, al momento de responder al agraviado, indicó que dicha información se encontraba reservada en términos del numeral 123 fracción V de La Ley de la Materia en el Estado de Puebla, la cual indica que se considera información reservada **la que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.**

En este orden de ideas, es importante indicar que, el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece que respecto a la causal de reserva establecida en el artículo 113 fracción VI de la Ley General y su homólogo,

el diverso 123 fracción V de la Ley de la Materia del Estado de Puebla, el sujeto obligado debe acreditar lo siguiente:

- La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.
- Que el procedimiento se encuentre en trámite.
- La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.
- Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Por lo que, el sujeto obligado al momento de contestar al recurrente, le anexó el acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de su Comité de Transparencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintitrés y la prueba de daño de dieciocho de octubre del año pasado, las cuales se analizarán para comprobar si cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en los párrafos anteriores.

En primer lugar, la autoridad responsable, en términos del numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, señala que acreditaba cada uno de los elementos indicados en el mismo, en los términos siguientes:

1.- La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, el sujeto obligado expresó que se acreditaba la existencia del proceso de la

Av 5 Ote 201, Centro, 72000 Puebla, Pue. C.P. 72000

Tel: (222) 309 60 60 www.itaipue.org.mx

auditoría integral número OIC-AI-03/2023 por el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil veintidós al treinta de septiembre de dos mil veintitrés, la cual fue notificada a la entonces Secretaria de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla actualmente la Secretaria de Administración y Planeación, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, mediante oficio OIC-DA-DCI-168/2023.

Lo anterior queda acreditado con los documentos que se le requirieron al sujeto obligado por auto de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, consistentes en lo siguiente:

El oficio con número OIC-DA-DCI-168/2023, de fecha veintidós de marzo del año pasado, firmado por la Titular del Órgano Interno de Control dirigido al Titular de la Secretaría de Administración ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, que dice:

"...le comunico que se llevará a cabo la Auditoria Integral número OIC-AI-03/2023, al rubro "Control interno implementado en la obtención, manejo, administración, gestión y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales", por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 22 de marzo de 2023, a la Secretaría de Administración, a su digno cargo.

El objeto de la auditoria es constatar el debido cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas en ingresos, recepción, administración y ejercicio de los recursos asignados, que se hayan efectuado en estricto apego a los criterios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, verificado los registros contables y presupuestales realizados, los contratos internos implementados para el ingreso de los recursos asignados y recaudados, así como la administración de los recursos humanos y materiales..."

2.- Que el procedimiento se encuentre en trámite, la autoridad responsable manifestó que la auditoria mencionada en el párrafo anterior inició el veintidós de marzo del año pasado y que se encuentra abierta y en revisión en la instancia señalada y aun no se ha tomado la decisión definitiva.

Lo anterior queda acreditado con el oficio con número OIC-DA-984/2023 de fecha uno de octubre de dos mil veintitrés, firmado por el Titular del Órgano Interno de Control dirigido a la Secretaria de Administración y Planeación, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, del cual se observa:

"...en alcance oficio no. OIC-DA-DCI-168/2023 a través del cual se notifico la Orden de Auditoria Integral número OIC-AI-03/2023 de fecha 22 de marzo de 2023, practicada a la entonces Secretaria de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, al rubro: "Control Interno Implementado en la obtención, manejo, administración, gestión y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales", y el oficio no. OIC-DA-453/2023 a través del cual se notifico la ampliación del periodo auditado por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de julio de 2023, con el objeto de constatar el debido cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y administrativas en ingresos, recepción, administración y ejercicio de los recursos asignados, que se hayan efectuado en estricto apego a los criterios

de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, verificado los registros contables y presupuestales realizados, los contratos internos implementados para el ingreso de los recursos asignados y recaudados, así como la administración de los recursos humanos y materiales.

En merito de lo anterior, se le notifica la modificación del periodo auditado, estableciéndose del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, así como la modificación al rubro auditado quedando "Administración, gestión y aplicación de recursos en materia de servicios personales, procedimientos de adjudicación en adquirió de bienes, arrendamientos y prestación de servicios, así como contratos celebrados en Materia Civil...".

Asimismo, en el oficio con número SAYP/DAOFyCI/071/2023 de fecha dos de octubre de dos mil veintitrés, firmado por el Director de Atención a Órganos Fiscalizadores y Control Interno dirigido al Titular del Órgano Interno de Control ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, en su anexo A, se observa:

**ENTREGA DE INFORMACIÓN
ANEXO "A"**

En relación con la Auditoría Integral Número OIC-AI-03/2023 correspondiente a "Control Interno implementado en la obtención, manejo, administración, gestión y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales", y de acuerdo con la información puesta a disposición de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, conforme al oficio SAYP/DAOFyCI/08/2023, se entregan los expedientes de arrendamiento realizados correspondientes al periodo 2023, la siguiente información:

CAJA	AÑO	UBICACIÓN	DESTINO	FOLIO DE CONTRATO
Caja 1	2023	PUEBLA	TRIBUNAL JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PJE-DSGRM/A-001/2023
	2023	PUEBLA	TRIBUNAL JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PJE-DSGRM/A-002/2023
	2023	PUEBLA	TRIBUNAL JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PJE-DSGRM/A-003/2023
	2023	PUEBLA	TRIBUNAL JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PJE-DSGRM/A-004/2023
	2023	PUEBLA	OFICINAS PUBLICAS	PJE-DSGRM/A-005/2023
	2023	PUEBLA	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	PJE-DSGRM/A-006/2023
	2023	PUEBLA	JUZGADOS FAMILIARES AUXILIARES SUPERNUMERARIOS	PJE-DSGRM/A-007/2023
	2023	LIBRES	JUZGADO MIXTO	PJE-DSGRM/A-008/2023
	2023	ZACAPOTLA	JUZGADO MIXTO	PJE-DSGRM/A-009/2023
	2023	ATLIXCO	JUZGADO FAMILIAR	PJE-DSGRM/A-010/2023
	2023	TEHUACAN	JUZGADO LABORAL	PJE-DSGRM/A-011/2023
	2023	TEHUACAN	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PJE-DSGRM/A-012/2023
	2023	HUAUCHINANGO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	PJE-DSGRM/A-013/2023
	2023	PUEBLA	BODEGA MUEBLES	PJE-DSGRM/A-014/2023

www.itaipue.org.mx

0010



**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A ÓRGANOS
FISCALIZADORES Y CONTROL
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

CAJA 2	2023	HUEJOTZINGO	JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DE LOS CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO	PJE-DSGRM/A-015/2023
--------	------	-------------	---	----------------------

Finalmente, el sujeto obligado remitió a esta autoridad la última actuación dentro de la auditoría de referencia, misma que se encuentra en los términos siguientes:



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

Dirección de Auditoría
Departamento de Auditoría y Seguimiento
Auditoría Integral No. OIC-AI-03/2023

Con relación con la Auditoría Integral número OIC-AI-03/2023 al rubro "Administración, gestión y aplicación de recursos en materia de Servicios Personales, Procedimientos de Adjudicación en adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios, así como Contratos celebrados en Materia Civil", al periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, la Dirección de Atención a Órganos Fiscalizadores y Control Interno de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, puso a disposición los expedientes de adjudicación del periodo auditado; por lo que en este momento se devuelven los expedientes correspondientes al periodo de octubre a diciembre de 2022 a la citada Dirección, derivado del requerimiento realizado por la Auditoría Superior del Estado; precisando que toda vez que la auditoría desarrollada por parte de este Órgano Interno de Control (OIC) se encuentra en proceso, dichos expedientes se encuentran reservados y sujetos a análisis, por lo que se solicita a la brevedad posible sean nuevamente entregados a esta OIC.

Expo- nente	Tomos	Número de Expediente	Nombre del Proveedor	Número de Contrato
1	1	ADID-004-2022	Sistemas Contino S.A. de C.V.	CIPIEP-ADJ-004-2022
2	1	ADID-005-2022	Sistemas Contino S.A. de C.V.	CIPIEP-ADJ-005-2022
3	1	ADID-006-2022	Mer Communication Systems de México S.A. de C.V.	CIPIEP-ADJ-006-2022
4	1	AI-ADQ-020-2022	Totalplay Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V.	CIPIEP-AI-ADQ-020-2022
5	4	AI-ADQ-021-2022	Blegam CORP, S.A. de C.V.	CIPIEP-AI-ADQ-021-2022
6	4	AI-ADQ-022-2022	ORLO Optimizadora de Insumos Operativos S.A. de C.V.	CIPIEP-AI-ADQ-022-2022
7	4	AI-ADQ-023-2022	José Antonio Hernández Pedro	CIPIEP-AI-ADQ-023-2022
8	4	AI-ADQ-024-2022	Durerli Services & Consulting S.A. de C.V.	CIPIEP-AI-ADQ-024-2022
9	4	AI-ADQ-025-2022	BBVINO, S.A.S. de C.V.	CIPIEP-AI-ADQ-025-2022
10	6	C-ADQ-014-2022	Gustavo Palacios Gálvez y/o Servicios Industriales Bear	CIPIEP-C-ADQ-014-1-2022
		C-ADQ-014-2022	Carolina Rodríguez Téllez y/o Soluciones Alternativas ROPSY	CIPIEP-C-ADQ-014-2022
11	6	C-ADQ-015-2022	INEROMEX, S.A. de C.V.	CIPIEP-C-ADQ-015-2022
12	6	C-ADQ-016-2022	Constructora Herguin, S.A.P.I. de C.V.	CIPIEP-C-ADQ-016-2022
13	12	I-ADQ-044-2022	Nidia Jessica Escobar Ramírez	CIPIEP-I-ADQ-044-2022

14	12	1	I-ADQ-045-2022	Enerveral, S. de R.L. de C.V.	CJPJEP-I-ADQ-045-2022
15	12	1	I-ADQ-046-2022	SISINTE, S.A. de C.V.	CJPJEP-I-ADQ-046/2022
16	15	3	L-ADQ-006-2022	Grupo Comercial y Profesional M&E 2007, S.A. de C.V.	CJPJEP-L-ADQ-006-2022



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

Dirección de Auditoría 0012
Departamento de Auditoría y Seguimiento
Auditoría Integral No. OIC-AI-03/2023

CVO	Caja	Tomos	Número de Procedimiento	Nombre del Proveedor	Número de Contrato
17	16	1	L-ADQ-007/2022	Trust 4.0 Seguridad Privada S.A. de C.V.	CJPJEP-L-ADQ-007-2022
18	16	4	L-ADQ-008-2022	Distribución, Aplicación y Equipos para Negocios S.A. de C.V.	CJPJEP-L-ADQ-008-2022
19	16	Tomo 1	L-ADQ-012-2022	Xardam Fumigaciones, S.A. DE C.V.	CJPJEP-L-ADQ-012-2022
19	17	Tomo 2-3	L-ADQ-012-2022	Xardam Fumigaciones, S.A. DE C.V.	CJPJEP-L-ADQ-012-2022

Puebla, Puebla a, 10 de enero de 2024

Órgano Interno de Control
Elizabeth Romero Armenta
Nombre y firma de quien entrega

Dirección de Atención a Órganos
Fiscalizadores y Control Interno
Carla Reyes Lara Martínez
Nombre y firma de quien recibe

3. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, el sujeto obligado señaló que la información requerida se encontraba relacionada de manera directa con el proceso deliberativo, toda vez que el documento solicitado refiere al análisis de la información y del procedimiento de la multicitada auditoria, toda vez que forma parte de un cúmulo de documentos que se toman en cuenta en la determinación de la

auditoria, por lo que, la información requerida se encuentra vinculada de manera directa con la misma.

Lo anterior quedó acreditado mediante los oficios con números OIC-DA-984/2023 de fecha uno de octubre de dos mil veintitrés, y SAyP/DAOFyCI/071/2023 de fecha dos de octubre de dos mil veintitrés, señalados en los párrafos anteriores, toda vez que en los mismos se advierte que los contratos requeridos por el recurrente fueron remitidos al Órgano Interno de Control mencionado para que fueran auditados, por lo que, la información requerida forma parte de la multicitada auditoría.

4.- Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, la autoridad responsable, indicó que el proceso de auditoria implicaba la revisión, la verificación y la comprobación de la información contenida en el área auditada, por lo que, la misma puede ser susceptible de ser modificada, ajustada y validada por las instancias que intervienen, en consecuencia, la eventual difusión de la documentación requerida obstaculizaría el desarrollo de los procedimientos que lleva a cabo el Órgano Interno de Control, hasta que los mismos concluyan y se cierren las mismas.

Lo anterior quedo acreditado con los oficios con números OIC-DA-DCI-168/2023 y OIC-DA-984/20236 puntualizados en los párrafos anteriores, toda vez que como lo señaló el sujeto obligado, la auditoría tiene como objeto el constatar el debido cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas en ingresos, recepción, administración y ejercicio de los recursos asignados, que se hayan efectuado en estricto apego a los criterios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, verificado los registros contables y presupuestales realizados, los contratos internos implementados para el ingreso de los recursos asignados y recaudados, así como la administración de los recursos humanos y materiales, por lo que, la difusión de los contratos requeridos por el recurrente obstaculizaría las actividades que se realizan en dicha auditoria.

Por otra parte, el sujeto obligado con el fin de justificar la clasificación como reservada que realizó respecto de la información requerida, en términos del numeral 126 de la Ley de Transparencia en el Estado de Puebla, señaló que:

✓ **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público:** era un **riesgo real** por que, el Órgano Interno de Control podría ver limitado sus funciones de revisión, supervisión, evaluación, control y seguimiento a la información materia de la auditoria integral número OIC-AI-03/2023 y al no haberse terminado la misma, la exposición a los medios de comunicación o la intromisión de terceros afectaría el proceso de conclusión de dicha auditoria.

De igual forma, el sujeto obligado indicó que era un **riesgo real demostrable**, toda vez que la entrega de la información solicitada obstaculizaría el procedimiento de la auditoria orientada a la determinación de la correcta aplicación de los recursos públicos o, en su caso, la identificación de actos u omisiones que pudieran constituir posibles irregularidades administrativas, aunado a que se estaría difundiendo información que forma parte de una revisión que no ha concluido, por lo que, podría contener datos inexactos, incrementando así la posibilidad de dañar la actuación de la autoridad competente.

Asimismo, la autoridad responsable, expresó que era un **riesgo identificable**, por que la entrega de la información obstruiría el ejercicio de facultades que permiten al área auditada realizar las aclaraciones correspondientes, y en consecuencia, la correcta sustanciación de la auditoria de merito por parte del Órgano Interno de Control, pues la divulgación de la información requerida podría alterar las tareas de revisión y evaluación llevados a cabo en la misma.

Bajo este orden de ideas y tal como se ha venido estableciendo en la presente resolución, los contratos con números PJE-DSGRM/A-001/2023; PJE-DSGRM/A-002/2023; PJE-DSGRM/A-003/2023; PJE-DSGRM/A-004/2023 y PJE-DSGRM/A-005/2023, están siendo auditados por el área del Órgano Interno de Control del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por lo que, existe

un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en virtud de que la auditoria con número OIC-AI-03/2023, se encuentra aún en trámite y la divulgación de la información requerida entorpecería el proceso de dicha auditoria, toda vez que la misma, tiene como objeto la determinación de la correcta aplicación de los recursos públicos o en su caso la identificación de actos u omisiones que pudieran constituir posibles irregularidades administrativas.

✓ **El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda y la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio,** la Directora de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, indicó que si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona tiene el derecho de ejercer su derecho de acceso a la información y los sujetos obligados deben garantizarlo; sin embargo, la información puede ser reservada por causa de interés público, en el presente caso sería la adecuada conducción del proceso de auditoria a la correcta aplicación de los recursos público, sin que esto representara una restricción al derecho de acceso a la información pública.

Por lo que, la divulgación de la información ocasionaría un daño y, en consecuencia, podría derivar una responsabilidad para el sujeto obligado, al transgredir disposiciones estatales de carácter obligatorio que ordenan resguardar la información cuya protección es obligatoria por tratarse de información reservada, en tanto no concluya el proceso de la multicitada auditoría.

Finalmente, la directora antes mencionada, señaló que existía un riesgo fundado por la difusión de la información ya que se afecta un proceso de auditoría que tiene por objeto general garantizar la correcta aplicación de recursos públicos, siendo tal situación de mayor interés, que los intereses del entonces solicitante de conocer los documentos requeridos.

Por tanto, la autoridad responsable acredita que el riesgo de perjuicio de la divulgación de la información supera al interés público general y la limitación se adecuaba al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, en virtud de que como lo manifestó, la auditoria tiene como fin la correcta aplicación de los recursos públicos, siendo esto de un mayor interés que el del entonces solicitante de conocer los contratos requeridos, por lo que, la divulgación de la información que se encuentra auditando ocasionaría un mayor daño que la reserva de la misma.

Por tanto y toda vez que el sujeto obligado acreditó cada uno de los elementos establecidos en los numerales 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, la información solicitada por el recurrente se encuentra clasificada como reservada por cinco años o en tanto concluya la auditoria integral número OIC-AI-03/2023, por lo que este Órgano Garante, con fundamento en el artículo 181 fracción III del ordenamiento legal antes citado, decide **CONFIRMAR** la respuesta del sujeto obligado en la solicitud de acceso a la información con número de folio **210425323000583**, por las razones antes expuestas.

PUNTO RESOLUTIVO.

ÚNICO. - Se **CONFIRMA** la respuesta del sujeto obligado en la solicitud de acceso con número **210425323000583**, por las razones señaladas en el considerando **SÉPTIMO** de esta resolución.

En el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como totalmente concluido, sin ulterior acuerdo. Notifíquese la presente resolución en el medio que señaló el recurrente y por el Sistema de Gestión de Medios Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Titular de la Unidad del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, **RITA ELENA BALDERAS HUESCA, FRANCISCO JAVIER GARCIA BLANCO y NOHEMÍ LEÓN ISLAS**, siendo la ponente la primera de los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada en la Heroica Puebla de Zaragoza, el día veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, asistidos por Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico.


RITA ELENA BALDERAS HUESCA
COMISIONADA PRESIDENTE.


FRANCISCO JAVIER GARCIA BLANCO.
COMISIONADO.


NOHEMÍ LEÓN ISLAS.
COMISIONADA.


HÉCTOR BERRA PILONI.
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO.

La presente hoja forma parte conducente de la resolución dictada en el expediente número RR-5306/2023, por unanimidad de votos de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada en la Heroica Puebla Zaragoza, el día veintiocho de febrero dos mil veinticuatro.

PD2/REBH/ RR-5306/2023/MAG/RESOLUCION.